



## Consejo Económico y Social

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1997/NGO/63  
18 de marzo de 1997

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS  
53° período de sesiones  
Tema 18 del programa

### SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

#### Exposición presentada por escrito por Vigilancia de los Derechos Humanos, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente disposición por escrito, que se distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[6 de marzo de 1997]

#### Servicios de asesoramiento para Guatemala

1. Vigilancia de los Derechos Humanos recomienda vehementemente que la Comisión de Derechos Humanos renueve el mandato de su experto independiente sobre Guatemala y elabore un programa eficaz de servicios de asesoramiento para ese país.
2. La Comisión de Derechos Humanos examina desde 1979 la situación de los derechos humanos en Guatemala. Entre 1982 y 1986, la Comisión asignó un Relator Especial a Guatemala, por considerarlo uno de los mayores violadores de los derechos humanos del mundo. Tras el establecimiento en 1986 de un gobierno civil, la Comisión transfirió a Guatemala a la categoría de servicios de asesoramiento, para proporcionarle consejos que permitiesen mejorar la situación de los derechos humanos. Como las violaciones graves de los derechos humanos prosiguieron, incluso con los gobiernos civiles, la Comisión aprobó en 1990 el nombramiento de un "experto independiente" para Guatemala que continuase prestando servicios de asesoramiento pero que al mismo tiempo preparase un informe público detallado sobre la situación de los derechos humanos.

3. La Comisión de Derechos Humanos tuvo inmensas consecuencias sobre los derechos humanos en Guatemala, en especial desde el nombramiento por primera vez de un experto independiente en 1990. Además de presentar informes precisos sobre las violaciones de derechos humanos, los expertos han formulado constantemente recomendaciones de reforma dirigidas a la solución de los problemas estructurales subyacentes que son causa de las violaciones. Algunas de las más importantes recomendaciones formuladas en el transcurso de los años por los expertos independientes Christian Tomuschat y Mónica Pinto fueron aplicadas por sucesivos gobiernos guatemaltecos, como, por ejemplo, la disolución y desarme de los comisionados militares y los patrulleros civiles -grupos de civiles organizados por el ejército para reunir información- que fueron responsables de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos, el establecimiento de la jurisdicción de los tribunales civiles en los casos de violación de derechos humanos (aunque el Tribunal Constitucional conoce en la actualidad de un recurso contra la ley que establecía el cambio de jurisdicción). Muchas otras recomendaciones han sido parcialmente aplicadas, como la desmilitarización del Estado Mayor Presidencial, o aceptadas en el contexto de los acuerdos de paz, como el establecimiento de un servicio civil de información y la reforma de la policía. Queda mucho por hacer para poner en práctica otras importantes recomendaciones, como el fortalecimiento de la oficina del Defensor de los derechos humanos y la prestación de servicios fundamentales sociales y económicos a toda la población. Es esencial que la Comisión de Derechos Humanos siga supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones y presentando informes al respecto, para afianzar las reformas iniciadas y prevenir nuevas violaciones.

4. Desde noviembre de 1994, Guatemala se ha beneficiado asimismo de la llegada de la misión de verificación de las Naciones Unidas conocida como MINUGUA, que desplegó a docenas de observadores de derechos humanos por todo el país. Las funciones del experto independiente y de MINUGUA se han complementado entre sí: mientras MINUGUA ha efectuado el tipo de verificación fiable y sólida que constituye la fuerza de una misión sobre el terreno, el experto independiente ha seguido hablando con gran autoridad sobre los mecanismos políticos y judiciales que se deben fortalecer y reformar para erradicar las violaciones a los derechos humanos y crear un poder judicial capaz de proporcionar reparación a las víctimas.

5. En el proceso de paz recientemente terminado, Guatemala ha aceptado por primera vez un inmenso número de complicados y ambiciosos compromisos relativos a los derechos civiles y políticos y también a los económicos, sociales y culturales. Muchos de estos compromisos reflejan las recomendaciones hechas por los expertos independientes de las Naciones Unidas en los últimos siete años. Estos nuevos compromisos encierran una formidable promesa de terminar con lo que a veces parecía ser violaciones endémicas de los derechos humanos. Sin embargo, si no se cumplen los compromisos, las esperanzas defraudadas y la pérdida del impulso podrían producir una rápida desintegración. Es esencial que la comunidad internacional, y en especial las Naciones Unidas, mantengan programas de estrecha vigilancia y asistencia en un momento en que Guatemala trata de cumplir estas nuevas obligaciones. Con el impresionante historial de logros que hasta ahora tiene Guatemala, la

Comisión se encuentra en una buena situación para seguir desempeñando su función de vigilancia y asesoramiento. Toda disminución de la vigilancia de las Naciones Unidas en este delicado momento sería contraproducente para la consolidación del proceso de paz.

6. Este año, por primera vez en mucho tiempo, Guatemala no se enfrenta a la posibilidad de que se le asigne un relator especial, lo que constituye un reflejo de la confianza de la Comisión en el compromiso adquirido por el Gobierno del Presidente Alvaro Arzú Irigoyen de introducir las reformas necesarias para mejorar la situación de los derechos humanos. El primer año del Gobierno del Presidente Arzú ha estado marcado por un número de importantes y audaces iniciativas en materia de derechos humanos, así como por la conclusión de las conversaciones de paz que han puesto fin a más de tres decenios de conflictos armados internos. Las violaciones de los derechos humanos por motivos políticos que había formado parte del paisaje de Guatemala -tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones- han pasado a ser la excepción y no la norma. El que estas medidas no hayan puesto todavía fin a la violencia no política de las fuerzas de seguridad o a la habitual impunidad de que gozaban los violadores de derechos humanos subraya la necesidad de proseguir la fiscalización internacional.

7. A la vista del compromiso mostrado por el Gobierno de Arzú de introducir reformas, Vigilancia de los Derechos Humanos insta a la Comisión de Derechos Humanos a hacer más efectiva la parte dedicada a la asistencia técnica del mandato del experto este año, prosiguiendo al mismo tiempo los aspectos de presentación de informes públicos al objeto de contribuir a la buena marcha de las medidas.

-----